



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

**Voto N°141-2020**

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, San José, adoptado en sesión número diecisiete de las diez horas veinte minutos del doce de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por **XXXX** cédula de identidad N°XXXX contra la resolución DNP-OD-M-414-2020 de las 14:10 horas del 03 de marzo de 2020 de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Redacta la Jueza Hazel Córdoba Soto;

**RESULTANDO:**

I.- Mediante resolución 622 adoptada en sesión ordinaria N°019-2020 realizada a las 07:00 horas del 20 de febrero de 2020 de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se recomendó la solicitud de jubilación al amparo de la Ley 7531. Consideró un tiempo de servicio de 406 cuotas al 31 de enero del 2020. Dispone el promedio salarial en la suma de ¢1.029.309,73y establece la mensualidad jubilatoria en ¢833.700,00. Con rige al cese de funciones.

II.- La Dirección Nacional de Pensiones mediante resolución N°DNP-OD-M-414-2020 de las 14:10 horas del 03 de marzo de 2020, deniega la jubilación ordinaria con base en que a la recurrente no le asiste el derecho jubilatorio por no contar con el tiempo mínimo de veinte años de servicio a la vigencia de las Leyes 2248 o 7268; así como tampoco al amparo de la Ley 7531 por haberse traslado de régimen, aclara que a pesar de que en la certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, indica que no existe expediente a nombre la petente, consta un documento emitido por la apelante de fecha 1 de noviembre de 1995, dirigido al Director de la Escuela Internacional Cristiana, donde solicita no seguir cotizando para la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional: razón por la cual se determina el traslado voluntario al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (considerando b1, documento N°36).

III.-En documento suscrito por el Subdirector General de Presupuesto Nacional, se acredita que no existe expediente a nombre de XXXX (ver documento 17).

IV.- Mediante escrito de fecha del 30 de marzo del 2020, la señora XXX presenta recurso de apelación contra la resolución número DNP-OD-M-414-2020 de la Dirección Nacional de



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Pensiones en el que alega: 1) Que la Junta de Pensiones aprueba la solicitud de prestación por vejez de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7531. 2) Que la Dirección Nacional de Pensiones se aparta del criterio de la Junta de Pensiones al considerar que consta en el expediente carta expresa de traslado, sin embargo, considera que dicho documento no fue tramitado por la recurrente, sino que es un documento dudoso y no le pertenece, cuestiona la autenticidad del documento, por cuanto en la esquina superior derecha sola consta una fecha anotada con lapicero de forma manual y en la esquina inferior derecha consta un sello ilegible, el cual no indica cual institución lo recibió. 3) Alega el que Subdirector General de Presupuesto Nacional, certifica que no existe expediente a nombre de la petente, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 29 y 32 de la Ley 7531, lo anterior permite demostrar que la apelante pertenece al Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, pues ha cotizado para el Régimen Magisterial desde el año 1985, además reitera que al no existir expediente de traslado en el Ministerio de Hacienda, es uno de los motivos principales por el cual la Junta de Pensiones aprueba la solicitud de pensión, tal y como lo indica la acción de personal emitida por el Ministerio de Educación N°201909-MP-4848045. Agrega que no ha recibido por parte de las dependencias públicas respuesta lógica, racional, clara, concisa, como para sentirse satisfecha con la pretensión de la Dirección en denegarle el derecho jubilatorio, por lo que el acto donde se le pretendió trasladar no fue eficaz. 4) Indica que ha cotizado para el Régimen de IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social y desde el año de su ingreso como docente desde 1985 ha cotizado para el Régimen de Reparto, y por ello tiene pertenencia al Régimen Magisterial. 5) Señala que, al no existir expediente en Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, no se cumple con lo establecido en el numeral 32 de la Ley 7531, no consta el pago de liquidación de las diferencias de cotización, basándose su argumento el voto 415-2019 del Tribunal Administrativo. Finalmente, su pretensión es que se declare con lugar el recurso de apelación y se le otorgue el beneficio jubilatorio como derecho le corresponde, bajo el régimen del Magisterio Nacional (ver documento N°38).

V.-Que en el presente asunto se han observado las prescripciones legales y no se observan nulidades que puedan causar indefensión;

**CONSIDERANDO:**

I.- Este Tribunal conoce del presente asunto como un órgano de instancia administrativa, de conformidad con la ley número 8777 del siete de octubre del dos mil nueve, y su reglamento Decreto número 35843- MTSS del día 28 de enero del 2010.

II. El fondo de este asunto versa sobre la discrepancia entre la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones, pues mientras la primera recomienda el beneficio jubilatorio al amparo de la Ley 7531 del 10 de julio de 1995,



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

contabilizando 406 cuotas al 31 de enero de 2020 y la segunda deniega el beneficio por esa normativa indicando que la petente se trasladó al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.

III.- Es importante aclararle a la apelante que el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional es un Régimen de servicio donde se debe cumplir con ciertos requisitos como son laborar bajo alguna de las instituciones cubiertas por la membresía, así como haber cotizado para el fondo de pensiones, y que durante su relación laboral en el sector educativo haya cumplido con los parámetros de tiempo para algunas fechas y así cumplir con el ámbito de cobertura, dispuesto en su Ley original la Ley 2248 que ha dejado en claro cuál es el rango de cobertura y aun teniendo varias reformas, las cuales son la Ley 7268 y la Ley 7531, esta última actualmente vigente, han determinado en su momento los requisitos para optar al beneficio al derecho jubilatorio bajo este régimen, desempeñando cargos docentes o administrativos y desde luego en instituciones de enseñanza.

Ahora bien, la denegatoria de la Dirección Nacional de Pensiones se fundamenta, en que consta un documento emitido por la recurrente de fecha 1 de noviembre de 1995, dirigido al Director de la Escuela Internacional Cristiana, donde solicita su traslado al Régimen de IVM que administra la Caja Costarricense del Seguro Social.

Previo al análisis de los motivos de la disconformidad, es importante citar la normativa que regula la cuestión, pues el asunto tiene su origen en las regulaciones a la ley 2248, reformada mediante la ley 7531, 8536 y 8784. Así las cosas, la Dirección Nacional de Pensiones sostiene que la apelante no tiene derecho a la jubilación por la ley 2248 por cuanto previo a la solicitud de la misma se trasladó voluntariamente al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, ejerciendo su derecho de opción regulado en el artículo 31 de la ley 7531, norma que establece:

**Derecho de Opción:**

*“La opción de traspaso a la que se refiere el párrafo tercero del artículo anterior, podrá ejercerse por una sola vez de manera que no procederá incluir de nuevo en el Régimen del Magisterio a los funcionarios que hayan optado por traspasarse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social.”*

Por otra parte, el artículo 2 de la ley 2248 fue modificado por última vez por la ley 8784, publicada el día 11 de agosto del año 2006, quedando su texto de la siguiente manera:

*“ARTÍCULO 2.- Derechos adquiridos*

*Las pensiones y las jubilaciones otorgadas por los regímenes mencionados en los incisos a) y b) del artículo anterior, continuarán reguladas por las normas vigentes en el momento de su adquisición, en todos sus elementos, salvo en lo referente a las*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*cotizaciones a cargo de los pensionados, lo cual queda sujeto a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la presente ley.*

*Las pensiones y las jubilaciones cuyos derechos se adquieran durante la vigencia de esta ley, se regirán por lo dispuesto para el Régimen transitorio de reparto o para el Régimen de capitalización, según el caso.*

*Los funcionarios que cumplan con los requisitos para adquirir el derecho a la pensión ordinaria según lo establecía el texto anterior, consagrado por la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991, dentro de los dieciocho meses posteriores a la promulgación de la presente ley, podrán pensionarse al amparo de las disposiciones establecidas en el mencionado texto.*

*Quienes al 13 de enero de 1997 hayan servido durante diez años consecutivos o quince alternos en zona incómoda e insalubre, con horario alterno, en enseñanza especial o educación de adultos, en primaria y secundaria, tendrán como derecho adquirido cuatro meses por cada año laborado en tales condiciones, sin exceder de cinco años, a efecto de completar el tiempo necesario para jubilarse.*

*(Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7946 de 18 de noviembre de 1999)*

*Quienes, al 18 de mayo de 1993 o al 13 de enero de 1997 hayan servido al menos durante veinte años en el Magisterio Nacional, mantendrán el derecho de pensionarse o jubilarse al amparo de la Ley N° 2248, del 5 de septiembre de 1958 y sus reformas, y a tenor de la Ley N° 7268, del 14 de noviembre de 1991, y sus reformas, respectivamente.*

*Asimismo, quienes en las fechas referidas en el párrafo anterior, no alcanzaren los veinte años de servicio y hayan operado su traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, no podrán obtener los beneficios establecidos en el presente artículo. (así dispuesto por la Ley 8536 publicada el 11 de agosto de 2006).*

*Transitorio I: -Para tales efectos, y a partir de la vigencia de esta ley, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional dispondrá de un plazo de tres meses para levantar un listado, el cual será refrendado por la Dirección Nacional de Pensiones en el término de dos meses, en el que se incorporarán los nombres y números de cédula de las 7662 personas que se verán beneficiadas mediante esta Ley. Este listado se levantará por única oportunidad y de este beneficio quedarán excluidos quienes no integren dicho listado. Las personas que se consideran afectadas por el acto general de exclusión del listado, expreso o tácito, podrán presentar los recursos de revocatoria y apelación dentro del plazo de un mes a partir de la publicación del listado en un medio escrito de circulación nacional. (El presente transitorio I fue derogado por el artículo 1 de la Ley 8784 publicada en La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre de 2009)*

*Transitorio II:-La inclusión de los beneficiarios se efectuará en el orden en que las solicitudes sean recibidas.*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No.8784, publicada en La Gaceta número 219 del 11 de noviembre de 2009)*

De este modo, resulta evidente que, con la promulgación de la ley 8536 que adicionó dos párrafos al artículo 2 de la ley 7531, el legislador otorgó un derecho de pertenencia a los servidores del Magisterio Nacional, que al 18 de mayo de 1993 hubieran cumplido 20 años de servicio, para tuvieran la posibilidad de jubilarse bajo el amparo de la ley 2248 de 5 de septiembre de 1958, mientras que quienes al 13 de enero de 1997 hubiesen cumplido ese mismo tiempo de servicio pudiesen pensionarse bajo las normas de la ley 7268 de 14 de noviembre de 1991, aun cuando hubieran operado el traslado al régimen del invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero una vez abandonado el Régimen Especial del Magisterio Nacional no es posible regresar al él.

En este mismo sentido la Sala Constitucional señaló:

*“Lo pretendido por los recurrentes es que mediante la vía constitucional obtener la autorización para reincorporarse al régimen de pensiones del magisterio nacional lo que a todas luces es improcedente. En efecto de conformidad con lo establecido en la ley 7531 del día 13 de julio de 199, se ofreció la posibilidad de trasladarse de cualquier régimen especial de jubilación, al régimen general, sea, que los aquí accionantes, en virtud de laborar en dos universidades estatales, estaban afiliados al régimen que administra la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, decidiendo de forma voluntaria y apegados a la posibilidad legal mencionada, trasladarse al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, para lo cual presentaron las solicitudes correspondientes, de las que no se aportan copias, pero que indican lo fue hace cinco años. La tramitación de sus solicitudes ha seguido su curso normal, pero luego de estos años sin que se hubiera verificado aun los traslados efectivos de sus cuotas anteriores al nuevo régimen alegan en el amparo que el acto de traspaso no se ha perfeccionado y por ello piden a la Sala se ordene el reintegro a su otrora régimen. Lo anterior no es posible desde el punto de vista legal, ya que el reglamento aplicable a estos casos, el Decreto Ejecutivo No 26096 H-MTSS publicado en el diario oficial el 30 de mayo de 1997, establece en su artículo 31 un plazo límite para los solicitantes de traslado puedan optar por su reintegro, ello dentro de los dos primeros meses desde la presentación de la solicitud respectiva, lo que no fue ejercido por alguno de los aquí recurrentes, según se ha informado bajo fe de juramento. En ese sentido, en los informes rendidos con ocasión de este recurso de amparo, se ha indicado que la Procuraduría General de la República se pronunció sobre ese aspecto, reafirmando la imposibilidad legal de retrotraer las consecuencias de la tramitación de las solicitudes de traslado de régimen de pensiones, una vez transcurrido el plazo mencionado. **(Sala Constitucional Voto 3063-1995 de las 15:30 horas del día 13 de junio de 1995).***



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

IV.- De acuerdo a la normativa expuesta y a los criterios jurisprudenciales vertidos con relación a la misma, este Tribunal arriba al válido convencimiento que el argumento de la Dirección Nacional de Pensiones, es de recibo, pues el traslado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social es un **“viaje sin retorno”**, salvo las excepciones *supra* indicadas, 20 años de pertenencia bajo el amparo de las leyes 2248 o 7268, y las cuales no se cumplen en el caso particular de la señora XXXX. No puede este Tribunal considerar otra forma de regreso por la vía de interpretación suplantando la voluntad del legislador. Estamos ante materia fiscal y considera este Tribunal que deberá ser mediante otra reforma legal que se habilite nuevamente el regreso de los servidores que se trasladaron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. En casos como el que nos ocupa si el legislador hubiera pretendido establecer una situación especial para los derechos jubilatorios por edad o cualquier otro beneficio lo habría consignado, situación que no se dio, pues decidió que solamente fueran los que demostraran tener 20 años de pertenencia en los sistemas *supra* indicados.

Consta en autos que la recurrente se trasladó al Régimen General de Pensiones administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, pues claramente en documento 18, se encuentra carta expresa de traslado recibido el 01 de noviembre de 1995 dirigida al Director de la Escuela Internacional Cristiana, mediante el cual gestionó el traslado del Régimen del Magisterio Nacional al de Invalidez, Vejez y Muerte.

En el expediente se observa que la recurrente laboró en la Escuela Internacional Cristiana, del 10 de mayo de 1985 al 06 de junio de 2007. En este caso, se presenta una situación particular a lo que comúnmente posee este tipo de asuntos de traslado de régimen y es que a la gestionante desde el año 1986 le dirigen sus cotizaciones para la Caja Costarricense del Seguro Social; obsérvese que en cuenta individual aparecen cotizaciones al régimen de IVM del año 1986 a junio de 2007, por labores en la Escuela Internacional Cristiana. (Ver documento 16). De manera que, en el momento en que realizó la carta de traslado, el 01 de noviembre de 1995, la gestionante no tenía ninguna cotización al Régimen de Reparto. Lo cual lleva a entender, que con esa carta estaba ratificando su deseo de seguir permaneciendo en el Régimen Universal de IVM y le expreso a su patrono su renuncia a ser incluida en el Régimen Transitorio de Reparto. La gestionante tenía tal claridad de su pretensión que en esa nota se lee: *“estoy enterada de que al salir de dicho régimen nunca más podré reingresar al mismo”*.

Esa situación explica, las razones por las cuales el Subdirector General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda certifique que: *“no existe expediente a nombre de XXXX, cédula de identidad número XXXX, razón por la cual en esta Dirección General no se le está tramitando ni se le ha realizado trámite alguno de traslado de cuotas o diferencias. ...”*. Ciertamente, no podría encontrarse expediente por devolución por diferencias de cotizaciones, entre lo reportado al Régimen Transitorio de Reparto y el IVM, porque, mientras la gestionante laboró para la Escuela Internacional Cristiana, sus cotizaciones estaban dirigidas al Régimen de Invalidez Vejez y



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera que no había ninguna diferencia de cotización a devolver por parte del Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, por razones que no se acreditan en el expediente, en el año 2005 la Escuela Internacional Cristiana paga, por el mecanismo de entero de gobierno, las cotizaciones al Régimen Transitorio de Reparto del periodo noviembre de 1985 a octubre de 1995. Ver documento 15 que corresponde a certificación del Departamento Financiero Contable de la JUPEMA. Esa certificación permite arribar a dos conclusiones; la primera es que en el año 1995 la gestionante realiza la solicitud de traslado y no se inicia trámite de diferencias de cotización, porque no había montos a devolver, y la segunda conclusión que se acredita, es que su patrono le reporta cuotas hasta octubre de 1995, porque tiene por consolidado que a partir de noviembre de 1995 se ejecutó el traslado de Régimen al IVM de acuerdo a la carta expresa de traslado del 01 de noviembre de 1995.

Es importante indicar que la gestionante, no ejerció el derecho de regreso al Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, dispuesto en el **decreto 26069-H-MTSS** que otorgó la posibilidad de retornar al Régimen Transitorio de Reparto con cargo al presupuesto Nacional estableciendo dos posibilidades, la primera el traslado de Régimen de Pensiones a los funcionarios que así lo solicitaran, en segundo lugar los requisitos a completar para que el traslado se diera efectivo entre ellos indicar claramente la operadora de pensión a la que desea permanecer.

Además, el Decreto Ejecutivo N° 26069-H-MTSS contenía un Transitorio II el cual indicaba a los funcionarios que a la entrada en vigencia a dicho reglamento los que hubieren solicitado su exclusión del sistema de pensiones del Magisterio Nacional y su inclusión en el Seguro de Invalidez Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social contarían con dos meses para manifestar su oposición. Caso contrario, la opción de traslado se tendrá por perfeccionada y sus efectos no podrán retrotraerse, sin embargo, dicho reglamento entro en vigencia el 30 de mayo de 1997 sea que el plazo para devolverse expiro el 30 de julio de ese mismo año.

Por lo que habiendo tenido la gestionante la oportunidad de retornar al Régimen del Magisterio Nacional conforme lo permitió el Decreto 26069-H-MTSS del 26 de mayo de 1997, decidió continuar con su traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Conviene citar expresamente lo dispuesto en el pronunciamiento C-172-97 del 17 de septiembre de 1997 de la Procuraduría General de la República en relación con el Decreto Ejecutivo N°26069-H-MTSS.

***A) AMBITO DE APLICACION DEL TRANSITORIO II.***



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*Esta norma transitoria II contempla el caso de los funcionarios que "antes" de la entrada en vigencia del DE-26069-H-MTSS -el viernes 30 de mayo de 1997- ya habían solicitado "su exclusión" del sistema de pensiones del Magisterio Nacional y "su inclusión" en el sistema de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*Consecuentemente, todos los servidores que "antes" de la entrada en vigencia de este "reglamento especial" hubiesen solicitado su exclusión e inclusión en los términos señalados, benefician -si esa es y fue su voluntad- del derecho subjetivo de oposición que se les confería reglamentariamente.*

**B) PLAZO PARA Oponerse AL CAMBIO DE REGIMEN DE PENSION.**

*A partir del viernes 30 de mayo de 1997, fecha en que se inicia la vigencia del decreto reglamentario No. 26069-H-MTSS, todos los servidores indicados en el punto "B", tenían un plazo de hasta "dos meses" para manifestar su derecho de oposición. Es decir, todos los funcionarios que habían solicitado su inclusión en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, tenían el derecho de "oponerse" a permanecer jurídicamente en ese régimen de la Caja. Este derecho de oposición lo estableció el Poder Ejecutivo para que el servidor del Magisterio Nacional pudiese retornar, con todos sus derechos, al régimen de pensiones propio del Magisterio Nacional.*

**C) PERFECCION DE LA OPCION DE TRASLADO Y SUS EFECTOS.**

*El Transitorio II establece que si el funcionario no expresa su derecho de oposición, la "opción de traslado" se tendría por "perfeccionada" con el transcurso de los "dos meses" y sus efectos no podrían retrotraerse. Conforme a esta norma, la inexistencia de oposición, generaba jurídicamente la perfección de la opción de traslado que se había realizado con anterioridad a la vigencia del DE-No. 26069-H-MTSS reglamentario. Y perfeccionado el "traslado", los efectos jurídicos de éste ya no podían retrotraerse, con lo que el servidor quedaba regido por el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*Por el contrario, si el funcionario, expresaba "su oposición", la "opción de traslado" no alcanzaba su perfección, y el servidor adquiría el derecho subjetivo a retornar al régimen de pensiones del Magisterio Nacional del cual había salido.*

*Por todo lo anterior, y de conformidad con el Transitorio II del DE-No. 26069-H- MTSS, debe la Universidad Nacional efectuar los trámites para reintegrar, en el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, a todos los servidores de esta Institución que, a partir del 10 de junio de 1995, ejercieron su derecho de opción y se afiliaron al régimen de*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que posteriormente ejercieron su derecho de oposición para efectos de reincorporarse al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.*

*(...) Estos servidores tuvieron un plazo de hasta "dos meses" para ejercer su derecho de oposición en los términos del Transitorio II. Por tanto, no es procedente, conforme a la relación del artículo 11 y Transitorio II otorgarles hasta "dos meses" para que ejerzan su derecho de opción" (que ya ejercieron pero que no había alcanzado su "perfección" por disposición del reglamento especial que se analiza). Todo, por cuanto lo que se autoriza reglamentariamente, respecto de este grupo de trabajadores, es el "derecho de oposición" al "derecho de opción" que ya habían utilizado...*

*En virtud de lo anterior, y respecto de los servidores que ejercieron su "derecho de oposición" resulta improcedente la aplicación del artículo 32 de la Ley 7531 que regula el "trámite" que sigue la "solicitud de traspaso" del Régimen Jubilatorio del Magisterio Nacional" al Régimen de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*En cuanto a los funcionarios que se encuentran en el supuesto del Transitorio I del DE-No. 26069-H-MTSS, la situación jurídica es diferente. Se trata de aquel grupo de trabajadores que "antes" de la entrada en vigencia del DE. No. 26060-H-MTSS, ya habían solicitado su exclusión del Régimen Jubilatorio del Magisterio Nacional y su inclusión en el Régimen Jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que mantienen la voluntad de pertenecer el régimen de la Caja. En este supuesto, estos servidores, cuentan con un plazo de hasta dos meses. Para "completar" los requisitos a que se refiere el artículo 9 de este reglamento ("Requisitos de la solicitud de traslado"). Debe puntualizarse que, en los términos del artículo 8 del reglamento, "es voluntaria" la "opción de traslado" del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*En los supuestos del Transitorio I, el trabajador mantiene voluntariamente su "derecho de opción" y beneficia de un plazo de hasta "dos meses" para completar requisitos. Respecto de este grupo de trabajadores es improcedente exigirle que exprese "su oposición en el plazo máximo de dos meses" en cuanto a la opción de traslado al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y si la administración universitaria requirió a los trabajadores expresar su "oposición" a la opción de traslado, y éstos no respondieron dentro del plazo indicado, la opción de traslado se habría perfeccionado; igual perfeccionamiento se lograría, conforme a los presupuestos reglamentarios, si los servidores expresaron su consentimiento de permanecer en el régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si por el contrario, los funcionarios expresaron su "derecho de oposición", se les aplicaría lo dispuesto en el Transitorio II según se explicó antes.*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*Debe entenderse que el artículo 11 del reglamento se aplica íntegramente a los servidores que -a partir de la vigencia del DE-No. 26069-H-MTSS- formulen su solicitud de "exclusión" del régimen jubilatorio del Magisterio Nacional y su "inclusión" en el régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, y no a quienes hubiesen hecho esta solicitud "exclusión-inclusión" "antes" de la vigencia de este reglamento ; pues en este último supuesto, se aplica, según el caso, los Transitorios I y II reglamentarios.*

*En cuanto a la aplicación del artículo 31 de la Ley 7531, debe, primeramente, transcribirse su texto, a fin de determinar su alcance:*

*"La opción de traspaso a la que se refiere el párrafo tercero del artículo anterior (traspaso a la CCSS), podrá ejercerse por una sola vez, de manera que no procederá incluir de nuevo en el Régimen del Magisterio a los funcionarios que hayan optado por traspasarse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social". (El escrito entre paréntesis y el destacado no es del texto original).*

*Relacionando este artículo 31 con el Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, tenemos que el "traspaso" al régimen de la CCSS no está "perfeccionado" por lo dispuesto reglamentariamente. Por lo que el retorno al Régimen Jubilatorio del Magisterio Nacional, es jurídicamente procedente.*

*No puede entonces, de modo independiente, aplicarse el artículo 31 de la Ley 7531, causando perjuicio a los trabajadores que reclaman legítimamente el derecho subjetivo de regresar al régimen jubilatorio del Magisterio Nacional.*

*En lo referente al artículo 32 de la Ley 7531, dispone éste que:*

*"Trámite" El interesado deberá dirigir la solicitud de traspaso al departamento de personal o de recursos humanos de la institución donde se encuentra laborando. Ese departamento lo excluirá a partir del primer día del mes siguiente al recibo de la solicitud. Del acto de exclusión, se enviará copia a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. El Estado procederá a la liquidación actuarial respectiva y enterará a la Caja Costarricense de Seguro Social, el aporte de cotizaciones correspondiente a quien solicite el traspaso".*

*Esta norma regula el "trámite" que debe observarse en las solicitudes de traspaso del Régimen jubilatorio del Magisterio Nacional al de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero esta opción de traslado no se perfeccionó, conforme a lo autorizado por el Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, respecto de quienes ejercieron el derecho de*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*oposición. Por tal razón, resulta inaplicable el artículo 32 –por sus efectos- a quienes ejercieron su derecho de oposición, dentro del plazo conferido por el Transitorio II.*

*En relación a la segunda pregunta del “aparte II” referente a si las normas – particularmente los Transitorios I y II- pueden aplicarse a los funcionarios que ya están adscritos al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social por haber ejercido el “derecho de opción” con “anterioridad” a la vigencia del DE-No. 26069-H- MTSS, la respuesta es afirmativa.*

*La finalidad de estos Transitorios es permitir que los servidores que ya habían jurídicamente optado por el régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, decidieran, voluntariamente, su regreso al régimen de pensiones del Magisterio Nacional.*

*El derecho de opción sólo se perfecciona si se cumple con los presupuestos reglamentarios que lo regulan. Y que en caso de oposición a la opción del traslado, el trabajador queda sometido al régimen jubilatorio del Magisterio Nacional, como se explicará en el “aparte III” siguiente.*

**III.** *¿En qué momento debe considerarse perfeccionada la acción de traslado, para el caso de los servidores que están trasladados y cotizar (sic) al seguro de IVM de la CCSS desde el año de 1995 o después, pero con anterioridad a la vigencia del decreto 26069 H-MTSS*

*La perfección de la “opción de traslado” debe analizarse conforme a la regulación contenida en los Transitorios I y II del DE-No. 26069-H-MTSS.*

*El Transitorio I señala que los funcionarios que “antes” de la vigencia de este reglamento hubiesen solicitado su “exclusión” del régimen jubilatorio del Magisterio Nacional y su “inclusión” en el régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, contarán con un plazo de hasta “dos meses”, a partir de la vigencia del DE-26069-H-MTSS, para completar los requisitos a que se refiere el artículo 9 de este reglamento. Este ordinal 9 hace una enumeración de los requisitos que deben observarse por quienes deseen ejercer el derecho de traslado al sistema de pensiones y jubilaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*Cumplidos estos requisitos, dentro del plazo máximo de dos meses, la inclusión en el régimen de la Caja, según dispone el artículo 11 del reglamento, “será efectiva a partir del primer día del mes siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de traslado, sea a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento del plazo de dos meses señalado en el párrafo anterior o del recibo de la renuncia del plazo”.*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*Y el párrafo final de esta norma 11 aclara aún más la situación del trabajador trasladado al régimen de la CCSS cuando señala que:*

*A partir del momento de la inclusión y con independencia de que se haya realizado el traslado efectivo de cuotas, el funcionario trasladado gozará de todos los beneficios del régimen, siempre y cuando cumpla con las condiciones en él establecidas”.*

*El transitorio II regula también el instituto de la perfección en lo atinente a la opción de traslado, de aquellas solicitadas formuladas e incluso efectivamente ejecutadas “antes” de la entrada en vigencia del reglamento que se analiza. Conforme a lo dispuesto en este reglamento, la perfección o no del traslado al régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, depende de la voluntad del trabajador.*

*Como principio general, el reglamento dispone que los traslados solicitados e incluso ejecutados, sólo se perfeccionan si transcurre un plazo de “dos meses”, a partir de la vigencia del DE-26069-H-MTSS, sin que el trabajador haya externado su “derecho de oposición” durante ese tiempo. La invocación de este derecho de oposición impide jurídicamente la perfección del derecho de opción, y sitúa al reclamante del derecho subjetivo en el régimen jubilatorio del Magisterio Nacional.*

**DICTAMEN**

*Por tanto, conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 inciso b), y 4 de la Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982, esta Procuraduría General de la República dictamina:*

*PRIMERO. Que de conformidad con el Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, debe la Universidad Nacional efectuar los trámites para reintegrar, en el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, a todos los servidores de esta Institución que, a partir del 10 de junio de 1995, ejercieron su derecho de opción y se afiliaron al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que posteriormente ejercieron su derecho de oposición para efectos de reincorporarse al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.*

*SEGUNDO. Que respecto de los servidores que ejercieron su .derecho de oposición. Conforme al Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, resulta improcedente la aplicación del artículo 32 de la Ley 7531 que regula el “trámite” que sigue la “solicitud de traspaso” del Régimen Jubilatorio del Magisterio Nacional” al Régimen de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*TERCERO. Que de la relación del artículo 31 de la Ley 7531 y de la disposición Transitoria II del DE-No. 26069-H-MTSS, se concluye que el traslado de trabajadores y el traspaso de cuotas, no se perfecciona en caso de que se haya ejercido el derecho de*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*oposición, razón por la cual no puede aplicarse, de modo independiente, el artículo 31 de la Ley 7531, causando perjuicio a los servidores que han reclamado legítimamente, el derecho subjetivo de retorno al régimen jubilatorio del Magisterio Nacional.*

*CUARTO. “. Que el artículo 32 de la Ley 7531 regula el “trámite” que debe observarse en las solicitudes de traspaso del Régimen jubilatorio del Magisterio Nacional al de la Caja Costarricense de Seguro Social”, traspaso que no se perfeccionó, conforme a lo autorizado por el Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, respecto de quienes ejercieron el derecho de oposición; razón por la cual, resulta inaplicable el artículo 32 – por sus efectos- a quienes ejercieron su derecho de oposición, dentro del plazo conferido por el Transitorio II.*

*QUINTO. Que en los supuestos del Transitorio I, el trabajador mantiene su “derecho de opción” y se beneficia de un plazo de hasta dos meses. Para completar requisitos; y respecto de este grupo de trabajadores es improcedente exigirle que exprese “su oposición en el plazo máximo de dos meses” en cuanto a la opción de traslado al régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social.*

*SEXTO. Que el artículo 11 del DE. No. 26069-H-MTSS se aplica íntegramente a los servidores que –a partir de la vigencia del DE-No. 26069-H-MTSS- formulen su solicitud de “exclusión” del régimen jubilatorio del Magisterio Nacional y su “inclusión” en el régimen jubilatorio de la Caja Costarricense de Seguro Social, y no a quienes hubiesen hecho esta solicitud “exclusión-inclusión” “antes” de la vigencia de este reglamento; pues en este último supuesto, se aplican, según el caso, los Transitorios I y II reglamentarios.*

*SETIMO. Que los Transitorios I y II del DE-No. 26069-H-MTSS pueden aplicarse a los funcionarios que ya están adscritos al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social por haber ejercido el “derecho de opción” con “anterioridad” a la vigencia del DE-No. 26069-H-MTSS, pero dentro de los supuestos que cada uno de estos Transitorios contempla.*

*OCTAVO. Que cumplidos los requisitos del artículo 9 del DE-No. 26069-H-MTSS, dentro del plazo máximo de dos meses, la inclusión en el régimen de la Caja, conforme al artículo 11 de este reglamento, “será efectiva a partir del primer día del mes siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de traslado, sea a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento del plazo de dos meses señalado en el párrafo anterior o del recibo de la renuncia del plazo”, independientemente de que se haya realizado el traslado de cuotas, gozando el funcionario trasladado de todos los beneficios del régimen, siempre y cuando cumpla con las condiciones en él establecidas.*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*NOVENO. Que conforme al Transitorio II del DE-No. 26069-H-MTSS, y como principio general, el reglamento dispone que los traslados solicitados e incluso ejecutados, sólo se perfeccionan si transcurre un plazo de “dos meses” sin que el trabajador haya externado su “derecho de oposición” durante ese tiempo ; pero que, la invocación de este derecho de oposición, impide jurídicamente la perfección del derecho de opción, y sitúa al reclamante del derecho de oposición en el régimen jubilatorio del Magisterio Nacional.”*

Con relación a lo transcrito, se aclara a la petente que el Decreto Ejecutivo N° 26069-H-MTSS, dispuso dos posibilidades la primera: el traslado de Régimen de Pensiones a los funcionarios que así lo solicitaran, en segundo lugar los requisitos a completar para que el traslado se diera efectivo, entre ellos indicar claramente la operadora de pensión a la que desea permanecer, dicho reglamento data del 26 de mayo de 1997.

Nótese además que el Decreto Ejecutivo N° 26069-H-MTSS contenía un Transitorio II el cual indicaba a los funcionarios que a la entrada en vigencia a dicho reglamento los que hubieren solicitado su exclusión del sistema de pensiones del Magisterio Nacional y su inclusión en el Seguro de Invalidez Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social contarían con dos meses para manifestar su oposición. Caso contrario, la opción de traslado se tendrá por perfeccionada y sus efectos no podrán retrotraerse, hubiere sido ese el momento procesal oportuno para que el gestionante manifestara su disconformidad y haber retornado al Régimen del Magisterio Nacional sin embargo siendo, que no se tiene como demostrado dentro del expediente administrativo, documento idóneo, en el cual manifestará su deseo de regresar al Régimen de Reparto el traslado se tiene como efectivo.

En este mismo sentido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en resolución 2004-00141 de las nueve horas treinta minutos del diez de marzo del dos mil cuatro resolvió:

**“IV.- LA NORMA APLICABLE AL CASO CONCRETO.-** Una vez aclarada la diferencia entre caducidad y prescripción, es necesario definir cuál es la norma aplicable al recurrente, y cual es su naturaleza De los artículos 10 y 11 del Decreto número 26069-H-MTSS, así como su Transitorio II quedan claros los casos específicos en que resultan aplicables los beneficios establecidos y el plazo para su ejercicio. El Decreto número 26069-H-MTSS, entró en vigencia el 30 de mayo de 1997, y al regular lo relativo al traslado de trabajadores y traspaso de cotizaciones del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, dispuso en su artículo 10, que la solicitud de traslado al Seguro de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social la debe presentar el interesado ante el departamento de personal o de recursos humanos del órgano o institución donde preste sus servicios. Se entiende que ese requisito, en la forma que lo establece la norma, solamente se puede cumplir una vez que ésta ha entrado en vigencia. El recurrente cumplió con tal requisito, antes de entrar en vigencia el Decreto, por lo cual su situación no calza dentro del



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*supuesto del artículo 10. El artículo 11 tiene directa relación con el anterior, al establecer la obligación del departamento de personal o de recursos humanos del órgano o institución donde labore el trabajador, una vez recibida la solicitud, y en el plazo máximo de cinco días hábiles, de notificar al interesado, que de no manifestar su oposición en el plazo máximo de dos meses, la opción de traslado se tendrá por perfeccionada. El recurrente, al haber presentado su solicitud el 2 de octubre de 1995, le resulta más bien aplicable el presupuesto que prevé el Transitorio II del mismo Decreto, mediante el cual se le otorgaba el derecho a todos los funcionarios, que previo a entrar en vigencia el citado decreto, hubieran solicitado su inclusión al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, o de “oponerse” a permanecer jurídicamente en ese régimen. En el caso del recurrente, habían transcurrido casi dos años desde su solicitud de traslado, y a partir de la entrada en vigencia del Decreto en mención, contaba con dos meses para plantear su oposición. Ese derecho de oposición lo estableció el Poder Ejecutivo, para que el servidor del Magisterio Nacional pudiese retornar, con todos sus derechos, al régimen de pensiones propio del Magisterio Nacional. Conforme a esta norma, la inexistencia de oposición, generaba jurídicamente la perfección de la opción de traslado que se había realizado con anterioridad a la vigencia del Decreto número 26069-H-MTSS. De manera que, perfeccionado el “traslado”, los efectos jurídicos de éste ya no podían retrotraerse, con lo que el servidor quedaba en adelante regido por el sistema de Invalidez, Vejez y muerte. Por el contrario, de expresar el funcionario su “oposición”, la “opción de traslado” no alcanzaba su perfección y el servidor adquiría el derecho subjetivo a retornar al régimen de pensiones del Magisterio Nacional del cual había salido. Para el caso específico del recurrente, lo único que se le autorizaba en el reglamento de comentario, era el “derecho de oposición” al “derecho de opción” que ya había utilizado. Del Transitorio II se rescata el principio general, de que los traslados solicitados e incluso ejecutados, sólo se perfeccionaban una vez transcurrido el plazo de dos meses, el cual, según lo explicado en el considerando anterior, corresponde a un plazo de caducidad. El derecho de oposición establecido en el Transitorio II lo estableció el Poder Ejecutivo para que el servidor del Magisterio Nacional pudiera retornar, con todos sus derechos, al régimen de pensiones propio del Magisterio Nacional, ello se hizo con el propósito de no generar discriminación, y en resguardo de los derechos de quienes con antelación hubieren hecho la solicitud. De lo analizado se concluye, que no procedía otorgarle al recurrente un plazo distinto para que ejerciera su derecho de opción, por cuanto éste ya lo había ejercido; y, por disposición del reglamento en cuestión, no había alcanzado su perfección. De manera que, lo que se autoriza reglamentariamente al grupo de trabajadores, dentro de los cuales se encuentra el recurrente, es el “derecho de oposición” al “derecho de opción” que ya habían utilizado, y en el plazo de caducidad de dos meses, el cual comenzó a correr el 30 de mayo de 1997, razón por la cual, lo procedente es rechazar el agravio que formula el demandado (...)*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

*(...) Ahora bien, es necesario aclarar, que no se requería otra notificación al accionante, pues la comunicación por publicación, prevista en el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública es válida. El decreto número 26-69-H-MTSS, se otorgó y simultáneamente se le notificó a todos los funcionarios en la misma situación que le recurrente, acerca del término de dos meses con que contaban para manifestar su oposición, establecido en el Transitorio II. Dicho término perentorio estaba destinado a fenecer, dada su naturaleza transitoria, en el plazo que corría a partir de su vigencia, de acuerdo con el artículo 29 del mismo, el 30 de mayo de 1997. En este sentido, se cuenta con un antecedente jurisprudencial, que es al Voto número 469, de las 15:50 horas del 26 de agosto de 2003 en el cual se indicó (...) el Poder Ejecutivo optó por la vía de la comunicación por publicación, previsto en el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública, propio de los actos de alcance general -que pueden o no tener alcance normativo-, como lo fue el establecimiento del Transitorio II del citado decreto reglamentario. Artículo que, si bien se mira, participa de la doble característica de ser a la vez una norma y un acto, solo que generales, por medio del cual se otorgó y simultáneamente notificó a dicho colectivo funcional el término de dos meses con que contaban para que manifestaran su oposición. Término perentorio, vale decir, destinado a fenecer en ese lapso, habida cuenta su naturaleza transitoria, a contar, lógicamente, desde su vigencia, sea desde el viernes 30 de mayo de 1997, fecha de su publicación en el Alcance No. 28 de la Gaceta No. 103, por así disponerlo su artículo 29. De modo que, una y otras disposiciones regulan supuestos distintos. Siendo ello así, no resultaba de aplicación obligatoria el citado artículo 11 del Decreto No. 26069- H-MTSS, por lo que no estaba obligado el Colegio Universitario de Cartago a notificarle personalmente al actor su derecho de oposición, y los plazos que contaba para ello (...)*”.

Así las cosas quedó acreditado en autos que la señora XXXX encuentra su pertenencia en el Régimen General de Pensiones administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, y siendo que la gestionante no logra completar los 20 años de servicio al 18 de mayo de 1993 tampoco al 13 de enero de 1997 para la pertenencia, pues se observa a documento 30 en hojas de tiempo de servicio confeccionadas por la Junta de Pensiones, que al 18 de mayo de 1993 logró reunir un total de 9 años 1 mes y 18 días y al 31 de diciembre de 1996 un total de 12 años y 9 meses. De manera que es evidente que la recurrente no alcanzó la jubilación ordinaria al amparo de normativas 2248 y 7268, por no reunir éste los 20 años en las fechas indicadas.

***V.- De los alegatos expuestos por la Recurrente***

Alega la recurrente que la nota enviada al Director de la Escuela Internacional Cristiana, es un documento dudoso que no le pertenece, además cuestiona su autenticidad, por cuanto en la esquina superior derecha sola consta una fecha anotada con lapicero de forma manual, y en la esquina inferior derecha aparece un sello ilegible, el cual no indica cual institución lo recibió.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Cabe aclararle a la gestionante que la carta de traslado suscrita por su voluntad y gestionada el 1 de noviembre de 1995, ante el Director de la escuela Internacional Cristiana, es un acto absolutamente personal y voluntario. De ahí, que no es válido cuestionar la autenticidad del documento, pues consta su firma. En cuanto al sello de fecha 26 de enero de 1996, si bien esta borroso, es claro, que se refiere al Departamento Financiero sección de cobros de la Junta de Pensiones, ello por cuanto, ese documento estaba custodiado en esa dependencia. Así se demuestra de la certificación del Departamento Financiero Contable, unidad de recaudación, visible en documento 19, que acredita que según sus registros custodian documento relacionado con el proceso de renuncia al Régimen Transitorio de Reparto.

Lo anterior, permite concluir, que la gestionante entregó al Director de la escuela Internacional Cristiana la carta de renuncia al Régimen Magisterial y siguiendo el procedimiento que dispone el artículo 32 de la ley 7531, esa Institución trasladó copia de esa carta a la Junta de Pensiones, documento que a la fecha se encuentra bajo su custodia y se aportó en la instrucción de este caso.

Finalmente, la gestionante solicita se resuelva su caso en igual sentido del voto 415-2019 de este Tribunal. Al respecto, se le aclara, que su situación fáctica no es idéntica a la resuelta en ese voto. El caso que este Tribunal resolvió fue el de una funcionaria que laboró para la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, teniendo todas sus cuotas reportadas a Magisterio, desde que ingresó a laborar y por razones que no logran acreditarse, no se le dio trámite alguno, para el pago de las diferencias de cotización, ni siquiera se abrió un expediente, tampoco se le ha cancelado suma alguna por concepto de diferencias de cotización. Es decir que, se trata de un caso que no guarda relación alguna con su situación fáctica, por cuanto la gestionante en el año 1995 cotizaba para IVM, incluso ratificó su voluntad de traslado de régimen, con la solicitud presentada el 1 de noviembre de 1995 y las razones por las cuales no le pagaron las diferencias de cotización era porque para esos años no habían cuotas dirigidas a Magisterio.

Así las cosas, este Tribunal concuerda con la denegatoria que realiza la Dirección Nacional de Pensiones, en que el traslado de la señora XXX del Régimen de Reparto al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte se ejecutó y se perfeccionó con la voluntad expresa de la recurrente. Se procede declarar sin lugar el recurso interpuesto y se confirma la resolución apelada DNP-OD-M-414-2020 de las 14:10 horas del 03 de marzo de 2020 de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

**POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación. **SE CONFIRMA** la resolución N°DNP-OD-M-414-2020 de las 14:10 horas del 03 de marzo de 2020 de la Dirección Nacional de Pensiones del



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se da por agotada la vía administrativa. Notifíquese a las partes.

**Luis Fernando Alfaro González**

**Hazel Córdoba Soto**

**Carla Navarrete Brenes**

*NDR*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES  
DEL MAGISTERIO NACIONAL

**NOTIFICADO**

A las \_\_\_\_\_ horas,

fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del interesado

Cédula \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre del Notificador